

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-7159-2023
CARATULADO : MANCILLA/FISCO DE CHILE

Santiago, doce de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 28 de abril de 2023, folio 1, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira y don Francisco Félix Bustos Bustos, abogados, domiciliados en calle Doctor Sotero del Río N° 326, oficina 1104, comuna de Santiago, en representación de don **Andrés Octavio Mancilla Cárdenas**, pensionado, mismo domicilio indicado, quien viene en deducir demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Sergio Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1225, piso 4, comuna de Talca, Región Metropolitana, por las razones de hecho y fundamentos de derecho que expone.

Con fecha 31 de mayo de 2023, folio 8, se notificó la demanda y su proveído a la demandada de autos mediante su representante legal.

Con fecha 22 de junio de 2023, folio 9, la demandada contestó la demanda deducida en su contra.

Con fecha 19 de julio de 2023, folio 17, la demandante evacuó el trámite de la réplica.

Con fecha 01 de agosto de 2023, folio 20, la demandada evacuó el trámite de la réplica.

Con fecha 03 de agosto de 2023, folio 21, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los allí señalados, notificándose la resolución a las partes mediante correo electrónico.

Con fecha 04 de diciembre de 2023, folio 49, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 29 de mayo de 2019, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira y don Francisco Félix Bustos Bustos, en representación de don **Andrés Octavio Mancilla Cárdenas**, quien viene en deducir demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Sergio Letelier Wartenberg, todos ya individualizados, por las razones de hecho y fundamentos de derecho que expone.

Fundan su pretensión en el relato de don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, quien fue secuestrado en el cuartel Terranova, más conocido como Villa Grimaldi,



desde el 11 de marzo hasta el 21 del mismo mes del año 1975, encontrándose privado de libertad y sufriendo tortura física y mental.

Explican que su representado fue detenido el 11 de marzo de 1975, por funcionarios de la Dina a la salida de su trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, a las 18.00 horas aproximadamente, puesto que lo estaban buscando desde el día anterior en la casa que habitaba de seguridad. Que dicho día 5 personas lo esperaban y llamándolo por el nombre lo guiaron por calle Morandé hasta Teatinos donde lo esperaba una camioneta Chevrolet C-10, momento en que le colocan scotch y gafas oscuras, trasladándolo a Villa Grimaldi para su interrogación sobre personas y hechos que no conocía. Agrega que en la medida que no conseguían lo que querían, ordenaban lo llevara a la “parrilla”, desnudándolo y colocando alambres en parte de su cuerpo para aplicar corriente al menos por 3 a 4 horas.

Relata que durante esa noche lo trasladaron a unas casetas y le advierten que no se sacara la venda, encontrándose con dos compañeros, uno dirigente del partido socialista y otro funcionario bancario muy aterrado, quienes al verlo lo tendieron en un camastro y le hicieron masajes. Que, al otro día nuevamente lo vuelven a interrogar en la misma forma, esto es, en la parrilla, donde una compañera que frecuentaba la casa de seguridad donde vivía le pidió que cooperara y hablara.

Así, el tercer día explica los sacaron al patio vendados y en fila, lugar donde fue reconocido por un militar y ex compañero del servicio militar del año 1965 en la comuna de Osorno, quien era un boxeador de la ciudad y un “buen milico”. Refiere que el cuarto día fue trasladado a la casa de seguridad donde vivía, registrando la casa por todos lados sin encontrar nada, para en la noche ser interrogado sobre su servicio militar y comandantes de escuadras, recibiendo golpes al no recordar nada, creyendo que correspondía al conscripto conocido en Osorno, ya que la información que quería obtener no tenía sentido. Luego, el quinto día vuelve a ser interrogado, gatillando un arma en su frente sin balas.

Indica que luego de dos días fue trasladado a Cuatro Álamos, donde lo dejaron en una sala por dos días más, para luego pasar a Tres Álamos, saliendo en libertad en septiembre de 1975, volviendo a su ciudad de origen donde fue buscado en dos oportunidades por servicios de seguridad.

Enfatiza que por los motivos expuestos, don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas ha sido reconocido como víctima en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Comisión Valech I, con el N° 13.855.

En cuanto al derecho, refiere que los hechos relatados constituyen un crimen de lesa humanidad al formar parte del catálogo de crímenes reconocidos por la comunidad internacional, según lo establecido en el artículo 6, literal C, del Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de 1945.



Asimismo, refiere que la responsabilidad del Estado y la obligación de reparar consagrada en la actual Carta Fundamental, se contiene en el artículo 38 inciso 2° que declara que toda persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado puede recurrir ante los Tribunales de Justicia a objeto de que se resarza el daño causado, estableciéndose por ende una acción de carácter constitucional para hacer efectiva la responsabilidad del Estado.

Que, la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional se encuentra consagrada mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como su concurrencia a la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, o el reconocimiento al Derecho Internacional o *Ius Cogens*, adquiriendo progresivamente una serie de obligaciones que responden al deber general de respeto de los derechos esenciales del hombre.

Hace presente, la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además, refiere sobre la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, puesto que la obligación de reparar es compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar adecuadamente a las víctimas, como lo rigen las normas y principios del derecho público e Internacional de Derechos Humanos.

Añade jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre casos de responsabilidad del Estado en delitos de lesa humanidad y, específicamente, por la reclusión ilegal en una isla del fin del mundo, para luego referirse sobre el daño provocado y el monto de la indemnización.

Explica que en el caso de autos existe un daño de carácter moral, expresado en dolor, sufrimiento, angustia, rabia e impotencia ante la situación injusta e ilegítima que vivió su representado, lo que genera una cierta dificultad para proponer ante la judicatura alguna cifra exacta que haga las veces de reparación integral del mal causado. No obstante, al ser requisito expresar con claridad las pretensiones de forma concreta, es que solicitan la suma de \$150.000.000 a título de indemnización por daño moral.

Previas citas legales, solicitan tener por interpuesta demanda en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidente del Consejo del Defensa del Estado, don Raúl Sergio Letelier Wartenberg, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al pago de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a favor don Raúl Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, por concepto de daños morales



que ha padecido con motivo de los hechos cometidos por agentes del Estado ya relatados o por la suma de dinero que el Tribunal estime en justicia, reajustada de acuerdo a la variación de IPC desde la fecha de la interposición de la demanda y el pago efectivo de la indemnización, más intereses y costas;

SEGUNDO: Que, con fecha 22 de junio de 2023, folio 9, la parte demandada contesta la acción deducida en su contra, a través de la señora Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, doña Ruth Israel López, solicitando el rechazo de la misma, en base a los siguientes argumentos.

En primer lugar, deduce la excepción de reparación integral - improcedencia de la indemnización solicitada por haber sido ya indemnizado el demandante, defensa que opone, atendidas las reparaciones ya otorgadas a las víctimas y a los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, haciendo presente al efecto que la Ley N° 19.123, así como otras normas jurídicas conexas, en su conjunto han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a tales víctimas y familiares, estableciéndose al efecto los siguientes mecanismos: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Que, en cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, sostiene que en término de costos generales para el Estado de Chile, dicho tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, las siguientes sumas de dinero: a) Pensiones: La suma de \$247.751.547.837, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123; b) Pensiones: La suma de \$648.871.782.936, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992; c) Bonos: La suma de \$41.910.643.367, asignada por la ley 19.980, más la suma de \$23.388.490.737, por la ley N° 19.992; c) Desahucio (Bono Compensatorio): la suma de \$1.464.702.888, asignada por la ley N° 19.123; y d) Bono Extraordinario (Ley N° 20.874), la suma de \$23.388.490.737.

En síntesis, a diciembre de 2019, el Fisco de Chile ha desembolsado un total de \$992.084.910.400.

En la especie, indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes Ns° 19.234 y 19.992, y sus respectivas modificaciones, leyes que establecieron una pensión anual reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; la suma de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años de edad, y la cantidad de \$1.549.422, para mayores de 75 años de edad. Adicionalmente a los montos antes referidos, el demandante recibió en forma reciente el aporte único de reparación contemplado por la Ley N° 20.874, por la suma de \$1.000.000.

Luego y en cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley



Nº 19.234, como de la Ley Nº 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios y superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, destaca la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto Nº 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La reconstrucción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley Nº 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.

Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo al demandante, no sólo han cumplido con todos los estándares internacionales de justicia transicional, sino que se han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera, las que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones.

En efecto, indica que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado, por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Estando entonces la acción deducida en autos basada en los mismos hechos y pretendiéndose indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, así como el tenor de los documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, se opone la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizado el demandante.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones y derechos invocados en la demanda, toda vez que de acuerdo al relato del actor la detención ilegal y tortura que sufrió ocurrió desde el día 11 de marzo de 1975 hasta septiembre del mismo año, en circunstancias que la demanda de autos fue notificada a su parte sólo con fecha 31 de mayo de 2023, habiendo transcurrido con creces el



plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, aun si se entiende suspendido el referido plazo legal durante todo el período de la Dictadura Militar.

En subsidio y, para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, que previenen los artículos 2514 y 2515, por cuanto entre la fecha en que se habrían hecho exigibles los supuestos derechos a indemnización, a la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Previo análisis de jurisprudencia sobre la prescripción, agrega que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no hay tratados que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los crímenes denominados como de lesa humanidad. Al respecto, cita La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La Convención Americana de Derechos Humanos; y el Convenio de Ginebra sobre Tratamientos de los Prisioneros de Guerra, entre otros.

Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de Derecho Internacional de Derechos Humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En tercer lugar, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas y, en subsidio, de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, solicita que la suma de \$150.000.000 se rechace, por cuanto la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. En tal sentido, hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Enfatiza que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica de la demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberá ser justificada íntegramente.

En cuarto lugar y, en forma subsidiaria, alega que en todo caso en la fijación del daño moral por los hechos esgrimidos en autos, el Tribunal debe considerar todos



los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a leyes de reparación, y que seguirán percibiendo a título de pensión y también los beneficios extrapatrimoniales que los distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad fue precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría una doble indemnización por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por el demandante en su libelo, esto es, desde la notificación de la demanda, por cuanto mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada en autos, no existe ninguna obligación para la demandada, no existiendo por ende ninguna suma de dinero que deba ser reajustada, mientras que tratándose de los intereses demandados, explica que el artículo 1551 del Código Civil, establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y se haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, solicita al Tribunal tener por contestada la demanda de autos, y con su mérito, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas, y en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido;

TERCERO: Que, con fecha 19 de julio de 2023, folio 17, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda y agregando ciertas consideraciones.

En cuanto a la excepción de reparación integral indica que los montos que otorgan las referidas leyes solo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990, en ningún caso dichas pensiones reparan íntegramente el dolor experimentado por su representado, subsistiendo intacto e irreductible hasta el día de hoy el sentimiento de injusticia y de no haber sido compensado, ni reparado, ni indemnizado, como lo han entendido los Tribunales Superiores de Justicia.

Añade que si se aceptara la tesis fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir, el Estado de Chile, dejando vedado a las víctimas de discutirlos.

Respecto a la excepción de prescripción extintiva, señala que es insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado, negando la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que ya han sido aplicadas por los tribunales de justicia ante violaciones graves de Derechos Humanos. En consecuencia,



la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los Derechos Humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya sea por su naturaleza ciertamente sancionatoria, por la contrariedad de los fines postulados y sobre todo por las situaciones que se busca regular;

CUARTO: Que, con fecha 01 de agosto de 2023, la demandada evacuó el trámite de la dúplica, reiterando las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en el escrito de contestación de la demanda, agregando jurisprudencia nacional al respecto;

QUINTO: Que, mediante resolución de fecha 03 de agosto de 2023, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los allí señalados.

Luego, con fecha 11 de agosto de 2023, se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante en contra de la resolución que recibió la causa a prueba;

SEXTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió prueba instrumental, consistente, en lo pertinente, en:

1.- Copia de escritura pública de fecha 18 de enero de 2018, otorgada por el Notario Titular de Osorno don Cristian Sanhueza Pimentel, Repertorio N° 107-2018, Mandato Judicial de Andrés Octavio Mancilla Cárdenas a Nelson Guillermo Caucoto Pereira;

2.- Copia de certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto de que Andrés Octavio Mancilla Cárdenas se encuentra en Comisión Valech I;

3.- Copia de certificado Servicio de Salud Osorno, Prais, respecto a don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas;

4. Copia de recurso de amparo, interpuesto ante la Iltna. Corte de Apelaciones con fecha 24 de marzo de 1975;

5. Copia de autorización de cobro de sueldo de fecha 07 de abril de 1975;

6. Copia de solicitud de libertad respecto de don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, al Ministro del Interior don César Raúl Benavides, y respuesta de fecha 04 de julio de 1975;

7. Copia de certificado de fecha 26 de septiembre de 1975, respecto a la permanencia de don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas en Tres Álamos y Puchuncaví;

8. Copia de sentencia que rechaza recurso de casación, de fecha 14 de septiembre de 2015, Rol N° 1092-15, de la Excelentísima Corte Suprema;



9. Copia de sentencia que rechaza recurso de casación, de fecha 13 de junio de 2018, Rol N° 8105-18, de la Excelentísima Corte Suprema;

10. Copia de sentencia Caso Órdenes Guerra y Otros VS. Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

11. Copia de Ord. N° 4792-15294, de fecha 28 de julio de 2023, emitido por el Instituto de Previsión Social, Departamento Gestión de Beneficios, Unidad Valech, Rettig y otros Beneficios Reparatorios, respecto de don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas;

SÉPTIMO: Que, además la parte demandante, rindió prueba testimonial, compareciendo con fecha 13 de septiembre de 2023, ante el 2° Juzgado de Letreos de Osorno, mediante Exhorto Rol E-1860-2023, doña **Sandra Raquel Meza Saldivia**, quien previa y legalmente juramentada e interrogada en cuanto al punto de prueba N° 3, esto es, si como consecuencia de los hechos descritos en autos, el demandante experimentó perjuicios, en su caso, naturaleza y monto de los mismos, refiere que conoce a Andrés Mancilla hace 10 años, por ser dirigente social y también usuaria Praís e hija de exonerado político. Agrega que ha participado con él en diversos conversatorios, y manifestaciones, enterándose por otras personas que fue torturado y preso político, detenido en Villa Grimaldi, evidenciando un daño moral y psicológico que quedó a través de los años, ya que cada vez que cuenta su historia hay un quiebre emocional y un deterioro a su salud. Preguntada la testigo responde que el demandante ha perdido la audición, problemas visuales y depresión sin tratar.

Acto seguido, comparece don **Miguel Barrera Vera**, quien previa y legalmente juramentado e interrogado en cuanto al punto de prueba N° 3, refiere que conoció al demandante en el 2004, cuando asistió a Praís, donde se enteró que fue detenido por la Dina en Santiago y trasladado a Villa Grimaldi, sin preguntar detalles por lo delicado de la situación. Agrega que posteriormente estuvo 4 años en Santiago y cuando volvió a Osorno nuevamente se encontró con Andrés, escuchando hace poco en una actividad ante un representante de Amnistía Internacional, su experiencia en los campos de concentración, entendiendo su actual condición física y las secuelas de la tortura, ya que tiene mala audición, visión, olfato y problemas para caminar. Preguntado el testigo responde que cree que una persona que fue torturada tiene problemas psicológicos, ya que él los tiene y fue exiliado, comentándole el demandante que tiene problemas para dormir.

Finalmente, comparece don **Luis Alejandro Agüero Vera**, quien previa y legalmente juramentado e interrogado en cuanto al punto de prueba N° 3, refiere que es trabajador social y ha tenido experiencia con ex presos políticos, por lo que tiene claro que se ven afectados emocionalmente de poder contarlos. Agrega que desde un tiempo a esta parte, el deterioro físico de la persona en cuestión se evidencia de



mayor forma y la sensibilidad al tocar los temas aflora más rápido, siendo fácil para él entender su sufrimiento;

OCTAVO: Que, por su parte, la demandada acompañó la siguiente prueba documental:

1. Copia simple Resolución Tra N° 45/142/2017, emitida por el Consejo de Defensa del Estado, con fecha 30 de agosto de 2017, relativa al nombramiento de doña Ernestina Ruth Israel López, en calidad de abogado Procurado Fiscal de Santiago;

2. Copia de certificado del Consejo de Defensa del Estado, respecto a doña Diana Henríquez Mariano, de fecha 05 de julio de 2023;

NOVENO: Que, el tribunal, a solicitud de la parte demandada ordenó la siguiente diligencia probatoria:

1.- Copia de Ord. N° 4792/15294, de fecha 28 de julio de 2023, emitido por el Instituto de Previsión Social, Departamento Gestión de Beneficios, Unidad Valech, Rettig y otros Beneficios Reparatorios, respecto de don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas. Dicha diligencia se encuentra cumplida y acompañada a los autos con fecha 31 de julio de 2023, folio 19;

DÉCIMO: Que, son hechos de la causa, por así encontrarse acreditados en el proceso, los siguientes:

1.- Que don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, fue detenido el 11 de marzo de 1975, saliendo de su trabajo en la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas, en la vía pública, permaneciendo privado de libertad hasta el mes de septiembre de 1975, en Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, Tres Álamos y Puchuncaví, donde fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes;

2.- Que, productos de los hechos ocurridos a don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, la familia presentó un recurso de amparo ante la Excelentísima Corte Suprema el 24 de marzo de 1975;

3.- Que, don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, Registro N° 13.855;

4.- Que, don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, ha obtenido los siguientes beneficios de reparación contemplados en: Ley N° 19.992, pensión por \$15.738.001; pensión Ley N° 19.234 por \$28.223.259; bono Ley N° 19.992, por \$3.000.000; aporte único por \$1.000.000; y aguinaldo por \$739.535, lo que da un total pagado de \$48.701.795, siendo la pensión actual de \$263.264, lo anterior, a la fecha de emisión del oficio respectivo, el 28 de julio de 2023;



UNDÉCIMO: Que, como se adelantó, en estos autos se ha deducido acción de indemnización de perjuicios por don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, en contra del Fisco de Chile, en atención al daño sufrido producto de su detención y tortura en manos de agentes del Estado, quien fuera reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos, por la denominada Comisión Valech, solicitando una indemnización ascendente a \$150.000.000 por concepto de daño moral o lo que el Tribunal estime pertinente.

Que, por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando su rechazo, en base a diversos argumentos, oponiendo excepción de reparación integral, por cuanto la actora ha sido reparada mediante desagravios de carácter simbólico y en programas; y haber operado la prescripción de la acción, tanto de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil como de 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes. En subsidio, para el caso de acogerse la presente acción, solicita que el daño sea regulado teniendo en consideración los beneficios extrapatrimoniales ya recibidos del Estado;

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la denominada “excepción de reparación integral” que opone la demandada, por haber sido resarcido el actor en conformidad a la Ley N° 19.992 y N° 20.874, cabe señalar que si bien consta en Ordinario N° 4792-15294, de 28 de julio de 2023, del Instituto de Previsión Social, que don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, ha recibido beneficios concedidos en las referidas Leyes, por un total de \$48.701.795 a la fecha -sin perjuicio de la pensión mensual que sigue percibiendo, ascendente a \$263.264-, lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, como ya ha sido establecido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

Por otra parte, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley, que dispone: “La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta Magistrado- con una reparación meramente simbólica;



DÉCIMO TERCERO: Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por la demandada en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que “... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino



que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo Rol ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada;

DÉCIMO CUARTO: Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a la pretensión de actor, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Que, como ya se adelantó, en el motivo décimo precedente, es un hecho de la causa que el demandante fue detenido y trasladado a un centro de reclusión, permaneciendo en tal condición por espacio de 7 días, siendo torturado y sometido a apremios ilegítimos, siendo calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech, ello de acuerdo a la prueba rendida en autos, apreciada en forma legal.

Que, estos hechos, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas.

En efecto, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella.

En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: “La fuerza Pública formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural...”; “... su misión



suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena.”

El artículo 4 del DL N° 5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna o intimidar a la población o procedan a su encierro o detención.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los Derechos Humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los Derechos Humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario;

DÉCIMO QUINTO: Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor.

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.



“El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88);

DÉCIMO SEXTO: Que, en orden a acreditar su existencia y evaluación, el demandante rindió prueba documental y testimonial que da cuenta, de las secuelas psicológicas y emocionales que presenta al día de hoy.

Así, consta de certificado de fecha 13 de enero de 2023, del Servicio de Salud de Osorno, Programa Prais, que el actor, don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, en su calidad de ex preso político, recibe atención permanente en dicho dispositivo de salud, y durante el transcurso de 13 años su condición de salud-enfermedad ha ido agudizándose, donde sus morbilidades y padecimientos derivados de su experiencia traumática revisten particularidades que han acentuado el daño en su cuerpo físico, psíquico y social, impactando en su vida cotidiana, tanto individual como familiar, siendo derivados a diferentes centros de salud;

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, si bien la privación de libertad y tortura, en el contexto que se ha reseñado, resulta difícil de calcular y cuantificar, el Tribunal lo regulará prudencialmente en la cantidad total de cuarenta millones de pesos (\$40.000.000), reiterando lo ya referido en las motivaciones precedentes y haciendo que si bien la privación de libertad por motivos políticos y sin causa justificada constituye de por sí una grave violación a los Derechos Humanos, en este caso aquella se prolongó por 6 meses aproximadamente, lo que importa un menoscabo a los Derechos Fundamentales de todo ser humano, y que se condice igualmente con las indemnizaciones fijadas por esta juez en casos análogos, teniendo en cuenta, además, las reparaciones ya percibidas por el actor, ascendentes a \$48.701.795, y la pensión que sigue recibiendo, que si bien no son incompatibles con esta indemnización, no pueden ser desconocidas;

DÉCIMO OCTAVO: Que al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor y con intereses, ambos desde que la misma quede ejecutoriada;

DÉCIMO NOVENO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistrado que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil;



artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve:

I. Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción deducidas por la demandada;

II. Que se acoge, parcialmente, la demanda de fecha 28 de abril de 2023 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de cuarenta millones de pesos (\$40.000.000), a favor del demandante don Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, con más los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo octavo precedente;

III. Que se exime de pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula, y en su oportunidad, archívese.

Consúltese si no se apelar.

Rol N° C-7.159-2023.

Pronunciada por doña **Soledad Araneda Undurraga**, Juez Titular.

Autoriza doña **Ximena del Pilar Andrade Hormazábal**, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. En **Santiago, doce de Diciembre de dos mil veintitrés.-**



